

Bogotá D.C., Julio 17 de 2025

Señores

Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá

E.S.D.

[Cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:Cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co)

[Abogado10@kingsalomon.com](mailto:Abogado10@kingsalomon.com);

**RADICADO ASUNTO 110014003-052-2007-01419-00**

**INCIDENTE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS**

**INCIDENTANTE: JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ**

**INCIDENTADO: BANCO AV VILLAS S.A.**

**ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN**

**WILLIAM CAÑON VELANDIA**, abogado en ejercicio, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá, identificado con la c.c. 79.583.746 de Bogotá y T.P. 120728 del C. S. de la Judicatura, con correo electrónico de notificaciones [asjuresp@gmail.com](mailto:asjuresp@gmail.com), actuando como apoderado de la PARTE INCIDENTANTE en la presente actuación procesal, me permito formular **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN contra la providencia del 11 de julio de 2025**, por medio de la cual el Juzgado resolvió negar la solicitud de nulidad formulada por esta parte procesal.

## **PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN**

Considerando que en la providencia del 11 de julio de 2025, el Despacho sostuvo que el presente incidente de liquidación de perjuicios, se rige por las normas del CPC, pero esta parte procesal insiste que las normas que lo han de regir son las del CGP, se sustentará la procedencia de los recursos interpuestos, desde la perspectiva del CPC y del CGP.

Aclarado lo anterior, se precisa que de conformidad con lo consagrado en el artículo 348 del CPC, en concordancia con el artículo 318 del CGP, salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez. Ahora bien, considerando que el auto que resuelve un incidente de nulidad no se encuentra enlistado dentro de aquellas providencias contra las cuales no procede recurso, es claro la procedencia del recurso de reposición contra el mismo.

En el mismo sentido, en caso que el a quo resuelva no reponer la decisión adoptada, se resalta que de conformidad con lo consagrado en el numeral 5 del artículo 351 del CPC, en concordancia con el numeral 5 del artículo 328 artículo 321 del CGP, procede el recurso de apelación contra el auto que resuelve un incidente.

En el mismo sentido, teniendo en cuenta que los recursos son interpuestos dentro del término de ejecutoria del auto del 11 de julio de 2025, los mismos son radicados oportunamente.

## **RAZONES QUE JUSTIFICAN LA REVOCATORIA DE LA PROVIDENCIA**

En el incidente de nulidad formulado por esta parte procesal, en términos generales se alegaron dos causales distintas: **(i) nulidad contenida en la misma sentencia judicial que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios**, por desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 constitucional y; **(ii) nulidad por indebida notificación de la providencia judicial del 19 de mayo de 2025**, conforme lo consagrado en el artículo 140 numeral 9 del CPC, en concordancia con art. 133 numeral 8 del CGP.

#### **EN RELACIÓN CON LA PRIMERA CAUSAL: NULIDAD CONTENIDA EN LA MISMA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE RESOLVIO EL PRESENTE INCIDENTE DE LIQUIDACION DE PERJUICIOS (ARTÍCULO 29 CONSTITUCIONAL – DEBIDO PROCESO)**

1. Se debe recordar, que esta parte procesal alegó la causal de nulidad por violación del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 constitucional, en esencia, al advertir que por las particularidades del caso (un incidente de nulidad que se inició dentro del tránsito legislativo entre el CPC y el CGP) se hacía indispensable que el órgano judicial, **a efectos de proferir la respectiva providencia judicial, que resolvió sustancialmente y de fondo el presente incidente de liquidación de perjuicios**, se manifestara de manera expresa si se trata de un **AUTO** (Art. 307 CPC) o de una **SENTENCIA** (Art. 278 y 283 CGP); aspecto procesal que no se realizó y conlleva a que los sujetos procesales no tengan certeza de la naturaleza de la providencia proferida.
2. Igualmente se destacó que esta irregularidad procesal: **a)** no es formal; **b)** se encuentra contenida en la misma providencia de fecha 19 de mayo de 2025; **c)** alcanza el grado de nulidad procesal por violación al debido proceso, de que trata el artículo 29 constitucional<sup>1</sup> y **d) no se encuentra saneada, dado que se configuró en la propia providencia que resuelve el incidente de liquidación de perjuicios.**
3. Adicionalmente, se destacó que la determinación clara y precisa sobre el régimen jurídico bajo el cual se resolvió el incidente de liquidación de perjuicios y la no identificación precisa de la providencia, como auto o como sentencia, **TRASCIENDEN** en la violación al **DERECHO DE DEFENSA** del incidentante, por cuanto: **(i)** si se considera que la providencia proferida es un auto en virtud de las normas del anterior CPC, contra el mismo solo procedería el recurso de reposición y en subsidio apelación (arts. 351 y 352 del CPC); **(ii)** por otro lado, si se entiende que la providencia tiene la naturaleza de sentencia, conforme a las normas del CGP, los recursos procedentes, serían el de apelación, casación y revisión (art. 321, 322, 334, 354 y 355 del CGP)

#### **A) Consideraciones del Juzgado para negar la declaratoria de nulidad solicitada**

4. Frente a esta primera causal de nulidad (vulneración debido proceso), el Despacho en síntesis sostuvo: **a)** que el artículo 29

---

<sup>1</sup> Se recuerda que la Corte Constitucional expuso que puede invocarse como causal de nulidad la violación del debido proceso, cuando no se observa la plenitud de las formas propias de cada juicio, como quiera que se transgrede el debido proceso. A modo enunciativo véase Sentencia T-061 de 2002.

constitucional ha sido interpretado como una fuente adicional de nulidad, no obstante, esta solo es aplicable cuando se trata de nulidad por prueba obtenida con violación, supuesto no alegado en el caso concreto; **b)** igualmente refirió, que si bien el CGP fue promulgado en julio del año 2012, su entrada en vigencia se dio por etapas, al punto que el Acuerdo No. PSAA15-10392 del 1 de octubre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, dispuso que el mismo entraría en vigencia en todos los distritos judiciales del país hasta el 1 de enero de 2016, razón por la cual el incidente de liquidación promovido en diciembre de 2012 debía regirse por las disposiciones del CPC, toda vez que fue iniciado con anterioridad a la entrada plena de vigencia de CGP; **c)** a lo anterior agregó que en providencia de segunda instancia del 15 de noviembre de 2023, el superior jerárquico indicó que debía tramitarse el incidente de liquidación de perjuicios conforme las reglas del anterior CPC, aspecto que no fue cuestionado oportunamente por esta parte procesal. **Con fundamento en estas consideraciones, negó la causal de nulidad por vulneración del debido proceso alegada.**

## **B) Motivos de inconformidad con la anterior decisión**

Con el debido respeto, se considera que la decisión de no declarar la nulidad de la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, debe ser repuesta por el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá, o en su defecto, revocada por el ad quem, por las siguientes consideraciones.

### **Frente al primer argumento del Juzgado:**

5. Se parte por resaltar, que contrario a lo indicado por el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá: **a)** la causal de nulidad por violación del debido proceso, **no solo procede por su vulneración en la práctica de pruebas; b)** por el contrario, tal y como lo ha referido la H. Corte Constitucional<sup>2</sup>, el respeto del derecho fundamental al debido proceso, implica que en toda actuación **la autoridad judicial está obligada a respetar las formas propias de cada juicio.**
6. En el mismo sentido, se destaca que la Corte Constitucional ha explicado, que la nulidad de la providencia que pone fin a una actuación judicial, no solo se configura por temas probatorios, sino **cuando se materializa una afectación al debido proceso que resulta “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”.**
7. Como casos, simplemente enunciativos de eventos en los cuales la Corte Constitucional<sup>3</sup> ha admitido que se puede configurar la causal de nulidad por violación del debido proceso, en sus propias sentencias judiciales, el máximo tribunal de lo constitucional ha destacado lo siguiente:

*“Respecto de las condiciones materiales, la Corte Constitucional ha señalado **que la afectación del debido proceso tiene naturaleza cualificada, por lo que, “debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”.**[32] La Corte*

<sup>2</sup> Véase Corte Constitucional, Sentencia T-061 de 2002

<sup>3</sup> Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 177 del 22 de abril de 2021, M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar

Constitucional **ha compilado algunos eventos que cumplen con estas características**, cuando:<sup>[33]</sup>

(i) Una Sala de Revisión se aparta de la jurisprudencia sentada por la Sala Plena de la Corte o la jurisprudencia en vigor de las salas de revisión.

(ii) Una decisión es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley o el reglamento.

(iii) Existe incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutive de una sentencia, una contradicción abierta en el texto del fallo, o la decisión carece por completo de fundamentación.

(iv) La parte resolutive de una sentencia de revisión de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso.

(v) La sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional.

(vi) De manera arbitraria se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales en la decisión.

**18.** Así las cosas, **excepcionalmente se puede declarar la nulidad, en esta sede, cuando se constate una violación grave del debido proceso en los trámites de constitucionalidad, siempre que comporte un impacto significativo al sentido de la decisión adoptada.**"

8. En concordancia con lo anterior, otras autoridades judiciales<sup>4</sup>, han destacado que la violación del artículo 29 constitucional, puede invocarse como como causal de nulidad: **a)** cuando la prueba en un proceso judicial se obtiene con su vulneración, como lo advirtió en sentencia C-491 de 1995 o **b)** **cuando no se observa la plenitud de las formas propias de cada juicio, como quiera que se transgrede el debido proceso;** lo que permite advertir que no es adecuada la afirmación del Juzgado, cuando indica que únicamente se puede alegar la causal de nulidad por violación del artículo 29 constitucional, cuando la misma se configura respecto a temas probatorios, **puesto que ello desconoce el verdadero contenido y alcance del referido artículo constitucional, y la interpretación amplia que del mismo ha dado la H. Corte Constitucional.**

9. Obsérvese que en el caso concreto, lo que se está alegando es que no se respetaron las formas propias del juicio, al proferir la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, por cuanto: **a)** el despacho, no determinó con claridad, el régimen jurídico bajo el cual se profirió la misma (CPC – CGP) **b)** ni tampoco precisó el tipo de providencia que profería (auto – sentencia) aspecto que como se precisó en el incidente de nulidad, no corresponde a una exigencia formal, sino que por el contrario, es sustancial y trasciende en la afectación al derecho fundamental al debido proceso de esta parte procesal, **ante la incertidumbre de los mecanismos procesales de impugnación con los que se cuenta.**

<sup>4</sup>A modo simplemente enunciativo véase Tribunal Superior de Boyacá, Sala Laboral, providencia del 28 de julio de 2016, M.P. Fanny Elizabeth obles Martínez, Radicado: 2016-1224

10. Obsérvese que la nulidad constitucional alegada: **a)** es ostensible, puesto que el Despacho judicial no ofreció claridad al proferir la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, sobre el régimen procesal bajo el cual se adelantaron las actuaciones, ni sobre la naturaleza jurídica de la providencia que lo definió; **b)** se encuentra debidamente probada, puesto que por un lado refiere que la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios se rige por las normas del CPC, pero por otro lado, notifica la misma conforme a normas del nuevo CGP (lo que evidencia falta de claridad o confusión en la materia.); **c)** es significativa, puesto que genera incertidumbre sobre los mecanismos de impugnación con los que cuenta este extremo procesal y; **d)** es trascendental, porque afecta el núcleo esencial del derecho fundamental a debido proceso, como lo es el derecho de defensa y contradicción.

### **Frente al segundo argumento del Juzgado:**

11. Sostiene el Despacho que el como quiera que el CGP solo entró a regir plenamente hasta el 1 de enero de 2016, en virtud el Acuerdo No. PSAA15-10392 de 1 de octubre de 2015, por tanto, el incidente de liquidación de perjuicios, promovido en diciembre de 2012, se debía regir por las reglas del anterior CPC.
12. Sobre el particular, debe partir por destacarse que no se desconoce que por las grandes reformas que implementó el CGP, especialmente en materia de oralidad, no todas sus disposiciones adquirieron vigencia una vez fue promulgada la norma, sino que algunas de ellas se difirieron en el tiempo, hasta que los diferentes circuitos judiciales contaran con la capacitación e infraestructura tecnología necesaria para su correcta implementación, conforme lo consagrado en el numeral 6 del artículo 627 del CGP, que dispuso:

**“Artículo 627. Vigencia.** La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:

1. Los artículos 24, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, **610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.**

(...)

4. Los artículos 17 numeral 1, 18 numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 6 y parágrafo, 32 numeral 5 y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).

(...)

6. **Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual,** en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, **y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país.”**

13. Por esta razón, se expidieron entre otros el Acuerdo No. PSAAA15-10392 del 1 de octubre de 2015, que, en esencia, lo que determinó fue la fecha en la cual entraría en vigencia la totalidad del CGP, frente a todos los distritos judiciales del país, que como se conoce fue el día 1 de enero de 2016.
14. No obstante lo anterior, debe reiterarse, como se manifestó al momento de formular el incidente de liquidación de perjuicios, que el propio CGP (Ley de la república) estableció unas **REGLAS DE TRANSICIÓN NORMATIVA** que deben ser observadas por los funcionarios judiciales y **no pueden ser desconocidas en virtud de interpretaciones sobre el contenido y alcance de Acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura.**
15. Obsérvese que el **artículo 624 del CGP**, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en concordancia con el **numeral 5 del artículo 625 del CGP (artículos que entraron a regir desde la misma promulgación del CGP, conforme lo consagrado en el numeral 1 del artículo 627 del referido estatuto procesal)** consagraron como: **(i)** regla general, que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen **sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.** En términos concretos, significa que **las normas del CGP prevalecen sobre las del anterior estatuto procesal civil, a partir de su entrada en vigencia** (se reitera que la entrada en vigencia del CGP fue el 12 de julio de 2012, cuestión diferente, es que ciertas normas consagradas en el numeral 6 del artículo del artículo 627 del CGP, por disposición legal entraron a regir de manera gradual en la medida que se contara con la infraestructura física y tecnológica requerida para su implementación, **que no corresponde al supuesto alegado en esta causa**); **(ii)** de igual manera, disponen a título excepcional o particular, a efectos del régimen de transición normativo, una especie de ultractividad, en los siguientes términos:
- “(...) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, **LOS INCIDENTES EN CURSO** y las notificaciones que se estén surtiendo, **se regirán por las leyes vigentes cuando** se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, **SE PROMOVIERON LOS INCIDENTES** o comenzaron a surtir las notificaciones.”* (Negrillas fuera del texto original)
16. Lo anterior implica concluir lo siguiente: **a)** en primer lugar que no se está frente a ninguna de las situaciones que en materia de transición legislativa permitía aplicar las normas del CPC, al presente tramite incidental, por dos razones básicas: **(i) no se trataba de un incidente en curso** cuando entraron en vigencia las normas del CGP; **(ii)** por el contrario, el **PROPIO INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS SE PROMOVIO Y SE ADMITIÓ EN VIGENCIA DEL NUEVO CGP** (Se promovió en diciembre 12 de 2012 y fue admitido el 27 de junio de 2013).
17. Lo expuesto permite advertir, que el Juzgado nuevamente se equivoca, al sostener que al incidente de liquidación de perjuicios no le eran aplicables las normas del CGP, por cuanto **ello desconoce claramente, el régimen de transición normativa expresamente consagrado por el legislador**, que se reitera, entró a regir desde la

misma promulgación del nuevo CGP, tal y como lo consagra el numeral 1 del artículo 627 del nuevo estatuto procesal.

18. En este orden de ideas, las normas aplicables al presente incidente de liquidación de perjuicios, **RESPECTO A LA PROVIDENCIA QUE LO RESUELVE DE FONDO**, son las contenidas en el CGP y no las relacionadas en el CPC, lo que significa que debió haberse proferido una **SENTENCIA** y no un auto.

#### **Frente al tercer argumento del juzgado**

19. Como último argumento para negar la declaratoria de nulidad procesal por violación del debido proceso, alegada por este extremo procesal, el Despacho puso de presente que en providencia de segunda instancia del 15 de noviembre de 2023, el superior jerárquico indicó que debía tramitarse el incidente de liquidación de perjuicios conforme las reglas del anterior CPC, aspecto que no fue cuestionado oportunamente por esta parte procesal, lo que según el Juzgado conllevó al saneamiento de la nulidad.
20. Sobre el particular, debe indicarse que desde el propio incidente de nulidad, la parte incidentante expuso: **a)** que no se pretende la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en el incidente de liquidación de perjuicios, **SINO ÚNICAMENTE DE LA PROVIDENCIA QUE RESOLVIÓ EL MISMO**, por las razones previamente expuestas; **b)** igualmente, se clarificó que **LA NULIDAD DE LA REFERIDA PROVIDENCIA NO SE PUEDE ENTENDER SANEADA**, porque la nulidad con verdadero efectos trascendentales en materia de vulneración del derecho fundamental al debido proceso, **solo se materializó con la expedición de la misma**, argumentos que **NO FUERON TENIDOS EN CUENTA NI ANALIZADOS** al momento de desatar el respectivo incidente de nulidad.
21. No es de recibo que el juzgado sostenga que la causal de nulidad se entendió saneada, cuando la nulidad alegada, solo se materializó con la expedición de la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios.
22. Obsérvese igualmente que esta parte, al momento de formular el incidente de nulidad, puso de presente: **a)** que el superior jerárquico había sostenido en una providencia, que el incidente se regía por las normas del CPC, **b)** no obstante, esta parte igualmente clarificó, **que tal decisión no fue motivada, en el sentido de justificar por qué en un trámite incidental que se presenta en vigencia del CGP se aplican normas del CPC.**
23. Igualmente, debe resaltarse que en el incidente de nulidad se expresó con claridad, los siguientes argumentos que no fueron tenidos en cuenta por el Juzgado al momento de decidir este incidente:
- “Como es de conocimiento y dadas las particularidades como se ha venido tramitado este incidente de liquidación de perjuicios (aplicando normas del CPC y del CGP), esa irregularidad puede entenderse aun saneada por cuanto las partes no la cuestionaron durante los respectivos momentos*

procesales (art. 144 del CPC – Arts. 132 y 136 del CGP) y esas actividades procesales no violan en esencia el debido proceso, dado que de alguna manera, respecto al propio trámite y sustanciación no guardan diferencias esenciales, que puedan afectar el derecho de defensa de los sujetos procesales.

**Cuestión diferente es la naturaleza de la providencia que debe resolver el incidente**, por cuanto, de acuerdo a lo argumentado en el numeral anterior, el trámite debió regirse por las normas del CGP, y consecuentemente, se reitera, **la providencia debe revestir la naturaleza de sentencia y no de auto.**

*Esta irregularidad procesal: a) no es formal; b) se encuentra contenida en la misma providencia de fecha 19 de mayo de 2025; c) alcanza el grado de nulidad procesal por violación al debido proceso, de que trata el artículo 29 constitucional<sup>5</sup> y d) no se encuentra saneada, dado que se configuró en la propia providencia que resuelve el presente incidente de liquidación de perjuicios.”*

24. Corolario de lo expuesto, y resaltando: **a)** que si bien el ad quem indicó en una providencia, que el incidente se regía por las normas del CPC, pero no justificó su afirmación y **b) NO PUEDE SOSTENER QUE LA NULIDAD ALEGADA SE ENCUENTRA SANEADA**, máxime si se tiene en cuenta **QUE LA MISMA SE CONFIGURÓ SOLO CON LA PROVIDENCIA QUE RESOLVIÓ DE FONDO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS**, se considera que este tercer argumento del Juzgado tampoco conllevaba a negar la declaratoria de nulidad procesal solicitada.

Por las anteriores consideraciones y especialmente, por entender que si se encuentra configurada la nulidad por violación al derecho fundamental al debido proceso, consagrada en el artículo 29 constitucional, respetuosamente se solicita al Despacho reponga su decisión, declarando la nulidad de la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, o que el ad quem revoque la referida decisión declarando la correspondiente nulidad procesal.

#### **EN RELACIÓN CON LA SEGUNDA CAUSAL: NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL DEL 19 DE MAYO DE 2025. (ART. 140 NUMERAL 9 DEL CPC EN CONCORDANCIA CON ART. 133 NUMERAL 8 DEL CGP)**

1. En el incidente de nulidad formulado, se destacó que aun si en gracia de discusión se considerase que la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios es un auto y no una sentencia, de igual manera debe declararse nulo y dejar sin efecto alguno el trámite relacionado con su propia notificación, en términos generales por lo siguiente: **a)** no es de recibo se sostenga que el trámite procesal se debe adelantar conforme a las reglas del CPC, sin embargo las notificación se realice, conforme a las reglas del CGP; **b)** no se cumplieron con los requisitos que el CPC consagraba para que se

---

<sup>5</sup> Se recuerda que la Corte Constitucional expuso que puede invocarse como causal de nulidad la violación del debido proceso, cuando no se observa la plenitud de las formas propias de cada juicio, como quiera que se transgrede el debido proceso. A modo enunciativo véase Sentencia T-061 de 2002.



entendiera debidamente notificada una providencia por estado electrónico, y que tenían como propósito acreditar que el día en el que se afirma haber notificado una providencia por estado, efectivamente se notificó (no obra firma del secretario en el estado electrónico); **c)** en el estado, no se identificó adecuadamente el proceso respecto del cual se estaba efectuado la notificación, ni los extremos procesales.

#### **A) Consideraciones del juzgado para negar la declaratoria de nulidad solicitada**

2. El juzgado: **a)** manifiesta de manera general, que la notificación por estado, se realizó de manera adecuada, lo que permite concluir que las partes procesales tuvieron conocimiento cierto y oportuno del contenido y alcance de la decisión; **b)** refiere que la ausencia de firma manuscrita del secretario, incluso bajo el régimen del CPC, no constituye por sí sola una causal de nulidad, siempre que se garantice el acceso efectivo a la providencia, como en efecto ocurrió en el presente caso; **c)** explica que el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022, indica que las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.

#### **B) Motivos de inconformidad con la anterior decisión**

##### **Frente al primer argumento del Juzgado**

3. Se parte por resaltar, que el Juzgado al momento de desatar el incidente de nulidad, no abordó todos y cada uno de los cuestionamientos formulados por esta parte procesal, que justificaban la declaratoria de nulidad de la notificación efectuada. A modo enunciativo, el Juzgado no se pronunció: **a)** sobre el argumento planteado por esta parte, en virtud del cual se resaltó la incoherencia de sostener que el proceso se debe tramitar conforme a las reglas del CPC, pero si efectuar una notificación por estado, conforme a reglas del CGP y normas procesales aún más recientes como la Ley 2213 de 2022; **b)** tampoco se advierte pronunciamiento alguno, en relación con la indebida identificación del proceso en el correspondiente estado electrónico a través del cual se notificó la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, argumento que estaba precisamente enfocado a resaltar, que por esa errónea identificación de la actuación judicial que se notificaba, la parte incidentante no tuvo acceso oportuno a la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios.
4. Las anteriores circunstancias que no fueron analizadas por el Juzgado, precisamente evidencian que la notificación por estado de la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, no se efectuó adecuadamente, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de este extremo procesal, lo que desvirtúa la afirmación del juzgado, según la cual “las partes procesales tuvieron

conocimiento cierto y oportuno del contenido y alcance de la decisión”.

#### **Frente al segundo argumento del juzgado**

5. Acepta el Juzgado que el estado electrónico por medio del cual se notificó la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, carece de la firma manuscrita del secretario del juzgado, que de fe que la referida providencia se notificó el día indicado, y dentro del horario afirmado. No obstante, refiere el Despacho que la ausencia de firma manuscrita del secretario, incluso bajo el régimen del C.P.C., no constituye por sí sola una causal de nulidad, siempre que se garantice el acceso efectivo a la providencia.
6. Sobre el particular, debe destacarse, que el procedimiento de notificación por estado ha sido diseñado: **(i)** para publicitar el contenido de la providencia que se pretende notificar y **(ii)** para dar certeza al usuario de la administración de justicia, que la publicidad de la providencia se hizo trasparentemente y conforme lo ordenado por el legislador.
7. Precisamente, la firma del secretario, respecto de la notificación por estado regulada en el CPC, tiene como propósito esencial cumplir el segundo presupuesto de transparencia.
8. En el caso concreto, esta parte procesal no tuvo acceso oportuno a la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, por las razones previamente expuestas, bajo ese entendido, **adquiere especial relevancia y trascendencia que el Juzgado hubiere cumplido con todos los requisitos legales exigidos por el legislador para entender debidamente notificada la providencia.**
9. No es de recibo, se excuse el no cumplimiento de las previsiones del CPC en materia de notificación por estado, bajo la simple afirmación que se garantizó el acceso efectivo a la providencia que se pretendía notificar.

#### **Frente al tercer argumento del Juzgado**

10. Finalmente sostiene el juzgado, que el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022 indica que las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, lo que excusa el hecho que el secretario del Juzgado, no hubiera firmado el estado electrónico a través del cual se notificó la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios.
11. Con el debido respeto, se considera que el anterior planteamiento tampoco se encuentra debidamente sustentado por las siguientes razones:
  - a) El Juzgado al momento de resolver el incidente de nulidad afirmó que el incidente de liquidación de perjuicios, se rige por las normas del anterior CPC, no obstante, para efectos de

justificar su actuar en materia de notificación por estado, pretende aplicar a la presente causa una norma procesal del año 2022, como lo es la Ley 2213 de 2022, lo cual no resulta coherente.

- b) Obsérvese que la Ley 2213 de 2022, en esencia lo que hizo fue establecer la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, norma esta última, que implementó el uso de las tecnologías de la información, en los procesos que se venían tramitando bajo el sistema de la oralidad. No obstante, el Juzgado de conocimiento, pretende aplicar la Ley 2213 de 2022, a un proceso, que según su criterio se rige por las normas del CPC, lo cual se reitera no es coherente.
- c) Con el debido respeto, se considera que la aplicación de las normas procesales no se puede efectuar de manera automática e indiscriminada, sino que hay que analizar y motivar con detenimiento, por qué en cada caso concreto, opera la aplicación de una norma procesal u otra; aspecto del que carece tanto la providencia que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, como la providencia que resolvió el incidente de nulidad y que ahora es cuestionada mediante el presente recurso.
- d) Por las anteriores consideraciones y resaltando que no se advierte justificación normativa alguna, que avale la aplicación de la Ley 2213 de 2022, y que en consideración de esta parte procesal, la misma no resulta aplicable al caso concreto, se considera que este argumento tampoco está llamado a prosperar.

Por las anteriores consideraciones, respetuosamente se solicita revocar la decisión adopta, y en su lugar procede la declaratoria de nulidad de la notificación por estado en virtud de la cual el a quo pretendió notificar la providencia judicial que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios.

#### **CUESTIONAMIENTOS FRENTE A LA CONDENA EN COSTAS PROFERIDA EN EL AUTO QUE RESOLVIO EL INCIDENTE DE NULIDAD**

1. Revisada la parte resolutive del auto del 11 de julio de 2025, por medio del cual el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá resolvió el incidente de nulidad, se advierte que el Juzgado profirió condena en costas contra esta parte procesal en la suma de \$800.000. No obstante, lo anterior, **revisada la parte considerativa, no se advierte motivación alguna que justifique la procedencia de la referida condena en costas y muchos menos que clarifique los criterios que se tuvieron en cuenta a efectos de su tasación.**
2. Lo anterior quiere significar, que **la providencia del 11 de julio de 2025, carece de total motivación en materia de costas**, lo que configura **una nueva violación del debido proceso de esta parte procesal**, puesto que la ausencia de motivación al respecto, impide igualmente el

ejercicio del derecho fundamental de defensa y contradicción de este extremo procesal.

3. Sobre el particular, debe destacarse que en nuestro ordenamiento jurídico, toda providencia judicial que no tenga por única finalidad impulsar el trámite, **DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MOTIVADA**, lo que implica como presupuesto necesario, que la autoridad judicial haga públicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva decisión, lo cual busca evitar que la misma se torne en arbitraria, caprichosa, antojadiza y por el contrario, evidencie que es el resultado del análisis objetivo y reflexivo de los diferentes elementos de juicio estudiados.
4. No obstante, como se ha venido resaltando, **la condena en costas en el caso concreto, carece completamente de motivación**, lo que de plano conlleva a que la decisión adoptada deba ser revocada y dejada sin efectos.

### PETICIONES

**PRIMERA:** Se solicita reponer íntegramente la providencia del 11 de julio de 2025, y en su lugar declarara la nulidad la providencia del 19 de mayo de 2025 y/o la nulidad de su notificación.

**SEGUNDO:** Igualmente se solicita se deje sin efectos la condena en costas proferida por el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá en la providencia del 11 de julio de 2025, a través de la cual resolvió el incidente de nulidad formulado.


**TERCERO:** En caso que no se reponga la decisión adopta y tampoco se deje sin efectos la condena en costas impuesta, por parte del a quo, se solicita al superior jerárquico revoque íntegramente la providencia del 11 de julio de 2025, declarando la nulidad **la providencia del 19 de mayo de 2025** y/o la nulidad de su notificación y revocando la condena en costas impuesta

### NOTIFICACIONES

Se informa que el incidentante recibe notificaciones en el correo electrónico [gamarjc3@yahoo.es](mailto:gamarjc3@yahoo.es) y su apoderado en el correo electrónico [asjuresp@gmail.com](mailto:asjuresp@gmail.com);

Se deja constancia, que se remite copia digital de este memorial, al correo electrónico de la parte incidentada [Abogado10@kingsalomon.com](mailto:Abogado10@kingsalomon.com);

Cordialmente,

  
 WILLIAM CAÑON VELANDIA  
 C.C. No. 79'583.746 de Bogotá D.C.  
 T.P. No. 120728 del CS de la J.  
 de la J.

[asjuresp@gmail.com](mailto:asjuresp@gmail.com)